



2 de junio de 2020

América Latina en la crisis del coronavirus

Dr. Jan Woischnik, Annette Schwarzbauer, Olaf Jacob, Anja Czymmeck, Kevin Oswald, Andreas Klein, Sebastian Grundberger, Thomas Schaumberg, Dr. Christina Stolte, Stefan Reith, Maximilian Hedrich, Nicole Stopfer, Dr. Georg Dufner, Michaela Braun, Hans Blomeier, Ann-Kathrin Beck, Dr. Rudolf Teuwsen, Severin Harpf, Evelyn Gaiser, Winfried Weck, Hannah Freericks

América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia de la covid-19. Además de las consecuencias sanitarias derivadas de la crisis del coronavirus, los Estados temen asimismo las consecuencias económicas que trae consigo el estado de alarma. Para las cerca de 650 millones de personas que viven en la región, de los cuales la mayoría trabajan en la denominada «economía informal» y no cuentan con ayudas públicas, esta pandemia puede convertirse en una cuestión de supervivencia, incluso sin altos niveles de contagio.

Resumen ejecutivo:

- › El coronavirus afecta a una región cuyos sistemas sanitarios no están en absoluto preparados para una epidemia de estas dimensiones. Las consecuencias sociales y económicas derivadas de esta crisis son aún muy difíciles de medir.
- › América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia con el triste resultado de cifras de contagio y fallecidos en constante aumento.
- › Además de los efectos sobre la salud causados por la pandemia del coronavirus, los Estados de América Latina temen las consecuencias económicas causadas por las medidas de confinamiento y la recesión mundial.
- › Las restricciones en la vida pública, así como la inminente crisis económica, tienen un impacto aún más dramático en la población latinoamericana más pobre y en aquellos que forman parte de la denominada «economía informal».
- › Algunos países de la región no podrán asumir por sí solos los costes causados por las medidas impuestas, ni amortiguar el impacto de la crisis económica, por lo que dependerán de la ayuda prestada por organizaciones internacionales y países donantes.
- › Los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) gestionan la propagación del coronavirus de manera muy diversa y el impacto de la crisis es, además, muy dispar.
- › A pesar de la relativamente buena gestión de la crisis en los países andinos, las economías de la región esperan un desplome del rendimiento económico y un fuerte ascenso de la pobreza como consecuencia de la crisis del coronavirus.
- › En los países de Centroamérica y en México no se pueden prever por el momento las consecuencias sanitarias, sociales y económicas.
- › Gracias a su sólido sistema sanitario, la eficiente reacción gubernamental y el comportamiento disciplinado de la población, Costa Rica registra una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo.
- › La gestión de la crisis en Brasil y México, países gobernados por presidentes de corte populista, es deficiente y responsable de las elevadas tasas de contagio y mortalidad.

Índice

América Latina en la crisis del coronavirus	1
Resumen ejecutivo:.....	2
Introducción.....	4
La covid-19 en el Cono Sur y Brasil	5
Argentina.....	5
Brasil	7
Chile	9
Uruguay.....	10
La covid-19 en los países andinos.....	12
Colombia.....	13
Venezuela.....	14
Perú	16
Bolivia	17
La covid-19 en Centroamérica y México	19
México	20
Guatemala.....	22
Honduras	23
Costa Rica.....	24
Panamá	26
Pie de imprenta.....	28
Autores.....	28

Introducción

Dr. Jan Woischnik

Con algún retraso respecto a Asia y Europa, la pandemia de la covid-19 llegó finalmente a mediados de marzo a América Latina. Los Gobiernos de la región han mostrado reacciones muy dispares frente a la amenaza del virus: mientras algunos países, como Argentina, Perú, Colombia o Bolivia declararon, de manera preventiva, un amplio estado de alarma tras unos pocos casos confirmados, otros países, gobernados por populistas, como México y Brasil, adoptaron tarde medidas de poco calado para mitigar los efectos de la covid-19.

Respuesta tardía y tibia por parte de Brasil y México

La mayoría de los países latinoamericanos han impuesto entretanto medidas de cuarentena. No obstante, a finales de marzo, cuando ya se habían declarado severas medidas de confinamiento en numerosos países y a la población solo se le permitía abandonar sus hogares para realizar compras o acudir al médico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no sobrevaloraran el riesgo del virus, animándolos a abrazarse también en tiempos de coronavirus. También en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ignoró de manera ostensible todos los avisos de la Organización Mundial de la Salud, minimizando el peligro del coronavirus, cuando su país ya registraba elevadas cifras de mortalidad. De este modo, ambos países, los mayores y más poblados de la región, perdieron un tiempo precioso en la lucha contra el virus.

Sistemas sanitarios no preparados para la crisis

Además, el virus azota una región cuyos sistemas sanitarios no están en absoluto preparados para hacer frente a una epidemia de estas dimensiones y cuyos efectos sociales y económicos son aún muy difíciles de medir. Entretanto, América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia, con el triste resultado de cifras de contagio y fallecidos en constante aumento.

De países como Brasil o Ecuador nos llegan escalofriantes noticias de enfermos de coronavirus a los que se les deniega el ingreso en hospitales saturados y que, poco después, fallecen. En numerosas regiones de América Latina apenas hay hospitales que funcionen de manera eficiente en circunstancias normales. Los respiradores requeridos para el tratamiento de la covid-19 de los pacientes más graves están solo disponibles generalmente en las grandes ciudades.

Se prevén graves consecuencias sociales y económicas

Además de las consecuencias sanitarias derivadas de la crisis del coronavirus, los Estados temen asimismo las consecuencias económicas causadas por los respectivos estados de alarma y la recesión mundial. Y es que la crisis de la covid-19 podría ser la antesala de una grave crisis económica para América Latina. Los economistas prevén que la economía de América Latina podría desplomarse el año próximo en casi un 4 %. Ya antes del brote de la pandemia, las economías de la región apenas registraban crecimiento, los ingresos reales de la población descendían y los niveles de pobreza crecían. Numerosos Estados latinoamericanos ya registraban altas tasas de endeudamiento antes de la crisis epidémica. El margen de maniobra para poner en marcha medidas de ayuda social y económica para la población durante los meses de confinamiento es, por tanto, extremadamente reducido en muchos casos.

La Comisión Económica de las Naciones Unidas alerta de que alrededor de un tercio de la población de América Latina podría caer por debajo del umbral de la pobreza a causa de la crisis del coronavirus. Para los cerca de 650 millones de personas que viven en la región, de los cuales la mayoría trabajan en la denominada «economía informal» y no cuentan con ayudas públicas, esta pandemia puede convertirse en una cuestión de supervivencia, incluso sin altos niveles de contagio.

La covid-19 en el Cono Sur y Brasil

Annette Schwarzbauer

Los países que forman el Cono Sur – Argentina, Brasil, Chile y Uruguay – gestionan la propagación del coronavirus de manera diferente y el impacto de la crisis es asimismo muy dispar. Argentina se enfrenta de nuevo a una inminente bancarrota estatal, que ya se anunciaba antes de la crisis del coronavirus. A pesar de estas condiciones previas negativas, el país apuesta por medidas muy estrictas de aislamiento que constituyen todo un desafío económico adicional. En Brasil, el presidente Bolsonaro aboga por mantener la economía lo más abierta posible en contraste con algunos gobernadores que declararon medidas de distanciamiento social. Bolsonaro se ha enfrentado asimismo con dos de sus ministros de Salud, que acabaron por dimitir en los últimos meses. Chile, que hace pocos meses fue escenario de agitadas protestas sociales, ha puesto en marcha medidas de aislamiento diversas en función de la región e intenta una vía intermedia. El referéndum sobre la redacción de la nueva Constitución fue aplazado hasta octubre de 2020 debido a la crisis actual.

El nuevo Gobierno de Uruguay, que tomó posesión en marzo de 2020, se vio confrontado de inmediato con la crisis del coronavirus y la ha gestionado hasta ahora con éxito trasladando el concepto de 'cuidarnos es responsabilidad de todos' a la población.

Argentina

Olaf Jacob

La noche del 19 de marzo de 2020, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció en un mensaje televisado a la nación el comienzo inmediato de una cuarentena nacional. Dicho anuncio estuvo acompañado por el cese inmediato de los transportes de larga distancia nacionales e internacionales. Ocho semanas después del anuncio de las medidas de aislamiento social, miles de argentinos siguen varados en el extranjero y en regiones apartadas del país.

Debido a las drásticas y tempranas medidas tomadas por el Gobierno, el modelo argentino para hacer frente a la pandemia se considera exitoso. El número de contagiados de covid-19 se mantiene desde hace semanas bajo, entre 100 y 300 pacientes confirmados al día. El epicentro de la pandemia en Argentina sigue siendo la región metropolitana de Buenos Aires, especialmente los barrios periféricos de la capital golpeados por la pobreza, así como las residencias de ancianos.

El pasado 11 de mayo se anunciaron medidas de desescalada en todo el país que se pusieron en marcha con efecto inmediato. En numerosas provincias en las que no se habían detectado ninguno o solo pocos casos de covid-19, vuelve poco a poco la normalidad. Los

comercios, las peluquerías e incluso los restaurantes están funcionando de nuevo. Las escuelas y universidades de todo el país, sin embargo, siguen cerradas. También el transporte de larga distancia sigue estando prohibido. Según informaron los medios, los vuelos nacionales no se reanudarán hasta septiembre, mientras que las conexiones internacionales tendrán que esperar hasta diciembre.

El talón de Aquiles de esta exitosa política para combatir la pandemia, apoyada ampliamente por la mayoría de la población argentina (según los sondeos, más del 70 % de los argentinos), es la paralización de la producción y del comercio en el área metropolitana de Buenos Aires. Más del 50 % del producto interior bruto argentino se genera en esta región, la más afectada por la epidemia.

La desescalada progresiva para salir del «aislamiento social» incluye la reapertura desde mediados de mayo de alrededor de 50.000 pequeños comercios en la capital y 500 medianas compañías industriales en el centro urbano de Buenos Aires. Estas empresas están obligadas a poner a disposición de sus empleados mascarillas de protección y organizar el transporte de estos de manera particular. Este último punto constituye un reto logístico y una carga económica adicional que apenas puede ser asumida por numerosas medianas empresas. El uso del transporte público sigue estando reservado exclusivamente a los empleados de actividades esenciales debido al alto riesgo de contagio.

A la lucha para mitigar la propagación del virus, hay que sumarle los desafíos económicos a los que se enfrenta Argentina, sumida en una profunda recesión económica desde hace dos años. Con una tasa de endeudamiento del 90 % del producto interior bruto, el país está fuertemente endeudado. La inflación alcanzó en 2019 casi el 54 %. La moneda argentina se devalúa casi diariamente pese a los tipos de cambio inflexibles. Cuatro de cada diez argentinos viven en la pobreza (con tendencia al alza). La pandemia de la covid-19 potenciará aún más esta tendencia negativa. La economía ya maltrecha antes de la epidemia, está paralizada. Los institutos de investigación económica pronostican una contracción del producto interior bruto en 2020 que puede ir del 6 al 10 %.

La hasta ahora exitosa lucha sanitaria del Gobierno contra la epidemia podría ser al final una victoria pírrica: Argentina queda exenta de una propagación masiva del virus, pero el desplome de la economía, debido a las severas medidas de confinamiento, podría causar un aumento de la pobreza, del desempleo y de la decadencia social. Las medidas de política fiscal para mitigar los síntomas del cierre económico total representan una simple gota en el océano. El país simplemente no dispone de las reservas en moneda necesarias para estimular la economía en la fase pospandemia.

De la ciencia, en cambio, llegan noticias positivas: investigadores argentinos han logrado desarrollar test rápidos para diagnosticar la covid-19. Se prevé que se puedan producir 100.000 kits a la semana. Los test desarrollados y fabricados en Argentina aumentarán notablemente las hasta ahora muy bajas cifras de diagnósticos realizados. También se ha puesto en marcha la producción nacional de respiradores. A este respecto, las altas expectativas puestas en la cooperación con China para combatir la pandemia resultaron frustrantes: los respiradores prometidos por China nunca llegaron a Argentina, el instrumental, la ropa de protección y los test rápidos de China eran de baja calidad y, en algunos casos, inservibles. China se percibe entretanto como socio no fiable en la lucha contra la pandemia. En las próximas semanas se introducirá una aplicación de rastreo desarrollada en Argentina que lleva el nombre de *CuidAR*, que será de uso obligatorio para todos los trabajadores. *CuidARv* servirá para que los propios trabajadores puedan evaluar su estado de salud. A través de la aplicación se podrá tomar regularmente la temperatura corporal y comunicar posibles síntomas y enfermedades en el entorno más cercano a las

autoridades sanitarias. La aplicación también incluye geolocalización. En estos momentos se discuten aún las cuestiones relativas a la protección de datos.

El *know-how* para la fabricación de test rápidos y respiradores, y el desarrollo de una aplicación de rastreo son muestras de que Argentina dispone de investigadores y científicos con excelente formación en comparación con el resto de los países del continente latinoamericano. Este es el resultado de un buen sistema de educación, tanto escolar como universitario, y de una política de investigación financiada y apoyada desde hace décadas por el Estado: sin duda un rayo de esperanza entre las negras perspectivas de futuro para Argentina tras la pandemia.

Brasil

Anja Czymmeck y Kevin Oswald

Con más de 160.000 personas contagiadas y más 11.000 fallecidos (actualización 11.05.2020) Brasil es actualmente uno de los países más azotados por la pandemia de la covid-19 de todo el mundo. Las cifras de contagio aumentan de manera exponencial en el país y se prevé que el pico de la pandemia se alcance a finales de mayo, primeros de junio, aunque el sistema sanitario público ya ha llegado al límite de su capacidad e incluso ha colapsado en algunos casos. En comparación con los países latinoamericanos, Brasil tiene las cifras más altas de contagio con diferencia, delante de Perú, que registra 60.000 pacientes confirmados.

En vista de la rápida propagación y la elevada tasa de mortalidad, así como de una calculada elevada cifra de pacientes no detectados, la mayoría de los expertos en sanidad son de la opinión que la gestión de la crisis del Gobierno brasileño debe calificarse como deficiente. Durante mucho tiempo, el presidente Jair Messias Bolsonaro ha minimizado de manera ostensible el coronavirus llegando incluso a denominarlo «pequeña gripe», aunque en Brasil se dieron casos de la enfermedad en una etapa temprana a causa de unos turistas que se habían contagiado en Italia. El primer caso en Brasil y en toda Sudamérica se detectó el 26 de febrero en São Paulo. A partir de principios de marzo, el virus se propagó rápidamente por las metrópolis de São Paulo y Rio de Janeiro, ciudades con la alta densidad poblacional y gran movilidad laboral.

No fue el presidente ni el Gobierno en Brasilia, sino los gobernadores de la mayoría de estados brasileños los que declararon medidas de aislamiento y el estado de alarma para proteger a la población. Estas medidas incluyeron el cierre de colegios y guarderías, playas, restaurantes y todos los negocios de actividades no esenciales. Aunque el presidente entretanto cedió, al menos de manera tibia, y en una entrevista habló incluso del «mayor desafío de nuestra generación», una de las consecuencias decisivas en política nacional a cuenta de la crisis del coronavirus es el enfrentamiento entre el presidente y la mayoría de los gobernadores.

Bolsonaro teme enormes pérdidas para la economía brasileña, que parecía estar recuperándose lentamente después de años de crisis, y exige por ello casi diariamente «la vuelta a la normalidad» y la apertura total de las actividades económicas. Los gobernadores, entre los que se encuentran antiguos aliados políticos, se han desmarcado del presidente y sostienen una posición radicalmente diferente. Para ellos, la cuestión principal es la protección de la población frente a este nuevo virus, para lo que es necesario emplear todos

los recursos y esfuerzos posibles con el fin de que evitar que el sistema sanitario público y los hospitales colapsen. En esta empresa recibieron el apoyo durante un tiempo del exministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, médico y defensor de las medidas de confinamiento consecuentes, que dimitió de su cargo el pasado 16 de abril por desavenencias con Bolsonaro.

La abierta oposición de los influyentes gobernadores y la actitud provocadora del presidente reflejan la profunda división de la sociedad brasileña. Especialmente en las grandes ciudades, donde se registran el mayor número de casos de contagio, el creciente descontento de la población se hace visible desde mediados de marzo, por ejemplo, a través de caceroladas. Al mismo tiempo, el presidente, que prioriza la economía a la protección contra al virus, no está en absoluto aislado con sus posiciones. Se apoya en un núcleo duro de simpatizantes que también se organizan en manifestaciones y que exigen una apertura inminente, sin tener en cuenta las reglas de distanciamiento social o la higiene.

La mayoría de los ciudadanos, en vista de las impactantes imágenes de hospitales saturados en regiones amazónicas del norte, por ejemplo, apoya las medidas de confinamiento. No obstante, hay todo un mosaico de opiniones a la hora de concretar las medidas de aislamiento y de desescalada. Apenas hay coordinación a nivel nacional y estatal. Así, el alcalde de Florianópolis permitió la apertura de los gimnasios el 20 de abril, mientras que la ciudad de Niterói, en el estado de RJ, había ordenado un cierre total.

De acuerdo con las estadísticas, hasta un 40 % de los trabajadores brasileños forman parte de la economía informal. Por esta razón, las primeras ayudas gubernamentales también se destinaron a este grupo de trabajadores, a los que se les prometió una ayuda estatal de 600 reales (=100€) al mes. En un plazo de 24 horas se registraron unos 22 millones de personas para acceder al cobro de este subsidio.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, anunció además un paquete de ayudas para la economía brasileña de 40 mil millones de reales (unos 7 mil millones de euros). Las pequeñas y medianas empresas no podrán despedir a sus empleados durante la crisis, a cambio de lo cual el Gobierno concederá créditos para pagar al menos dos nóminas a más de 10 millones de empleados. Hasta ahora no hay en Brasil estadísticas oficiales sobre la evolución de las cifras de desempleo durante la crisis. Debido a la dependencia del turismo y al desplome de los precios del crudo, se prevé con toda seguridad un impacto significativo en el mercado laboral.

También agrava aún más la situación el hecho de que en los últimos años haya aumentado la dependencia de productos importados de China. La merma de producción en el gigante asiático desde principios de año había perjudicado a la industria brasileña, enfrentada a una situación de escasez de suministro desde el comienzo de la pandemia mundial. La relación con China es ambivalente: por un lado, se necesita el suministro de mascarillas y otros productos sanitarios de China y, por otro, como en el caso de Estados Unidos, se lanzan acusaciones a los mandatarios chinos, incluso desde el entorno más cercano al presidente.

También preocupa que los inversores globales retiren de los países emergentes sumas de dinero en cantidades desconocidas hasta ahora, lo que ha conducido en pocas semanas a la devaluación masiva del real. No son pocos los que pronostican que las consecuencias de la crisis sanitaria podrían empujar a Brasil a una situación de endeudamiento excesivo.

Chile

Andreas Klein

Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias chilenas desde la detección del primer caso de coronavirus el pasado 3 de marzo se concentraron en un primer momento en la identificación de las cadenas de contagio y el aislamiento de personas que habían estado en contacto con la persona contagiada, así como de aquellas personas que hubieran regresado de países de riesgo. Además, el presidente Sebastián Piñera anunció el 16 de marzo un amplio paquete de medidas junto con la declaración del estado de excepción en todo el país, que incluía el cierre de las fronteras nacionales, el toque de queda nocturno y la suspensión de las clases lectivas. El Gobierno intentó además reaccionar de manera puntual a las cifras crecientes de contagio a través de una «cuarentena dinámica».

Con el fin de poner en marcha dichas medidas, se desplegaron fuerzas policiales, pero también militares. Esto fue percibido por la mayoría de la población como un drástico recorte de libertades y derechos en el contexto de las protestas sociales del año pasado. Estas medidas evocaron también recuerdos perturbadores de la época de la dictadura militar. Sin embargo, las medidas se aceptaron como un mal necesario para preservar la seguridad en la lucha conjunta contra el virus.

Con 37.000 pacientes confirmados y 368 fallecidos (actualización 15.05.2020) debido al coronavirus, Chile ha salido hasta ahora bien parado de la crisis epidémica. No obstante, los cementerios se preparan para cifras más elevadas de fallecidos. En vista del dramático ascenso del número de contagios en los días anteriores, especialmente en la capital, el Gobierno ha decretado a partir del viernes, 15 de mayo, cuarentena total durante una semana para la provincia de Gran Santiago.

En cuanto a los respiradores, las autoridades sanitarias chilenas se han provisto de equipos adicionales. Gracias a la adquisición y adaptación de equipos de anestesia, la capacidad actual se sitúa en alrededor de 3.000 aparatos. Recientemente se recibieron 200 aparatos adicionales donados por China y los Países Bajos.

Las consecuencias económicas de la pandemia no son en Chile menos dramáticas que en el resto del mundo. Las exportaciones de cobre, salmón, fruta y vino sufren una fuerte reducción de la demanda y grandes dificultades para su transporte. Solo en marzo alrededor de 300.000 empleados fueron despedidos. La tasa de desempleo, que antes de las protestas sociales en octubre se situaba en un 7 %, alcanzará claramente los dos dígitos debido a la pandemia. El Banco Central prevé (actualización mediados de abril) un descenso del producto nacional para el año presente que ascenderá al 2,5 %. El Fondo Monetario Internacional se muestra más pesimista y pronostica un descenso del 4,5 %.

Ya en el mes de marzo, el Gobierno puso en marcha un programa de ayuda económica para paliar los efectos de la crisis. El programa incluye desgravaciones fiscales, pagos directos a personas necesitadas, medidas de protección laboral y recursos financieros adicionales para municipios y ciudades. En abril se amplió notablemente el programa de ayudas, añadiendo recursos para pequeñas y medianas empresas, así como para los empleados en el sector informal. El programa de ayudas incluye medidas de un valor de 17 mil millones de dólares, lo que corresponde casi al 7 % del producto interior bruto chileno.

Un elemento central del programa de ayuda económica en Chile es la preservación de los puestos de trabajo. En marzo ya se había promulgado la Ley de Protección al Empleo en el Parlamento. Solamente en abril se ampararon en ella más de 66.000 empresas en Chile, suspendiendo así los pagos de las nóminas a más de medio millón de empleados, que tuvieron derecho a recibir prestaciones por desempleo.

En una primera declaración en marzo, el Gobierno prometió un pago único de casi 100 dólares a personas necesitadas y trabajadores con escasa remuneración. A esto se añadió en una segunda fase el llamado «ingreso familiar de emergencia». Alrededor de 4,5 millones de chilenos (casi un cuarto de la población) tienen derecho a recibir dicha ayuda. Este subsidio se cobra durante tres meses.

El llamamiento a la recepción de ayudas públicas directas para empresas privadas solo se ha hecho de manera aislada, por ejemplo, en relación con la compañía aérea Latam que, al igual que Lufthansa, lucha por su supervivencia. La aerolínea tiene una plantilla de 40.000 empleados, de los cuales una cuarta parte trabaja en Chile. Oficialmente el Gobierno chileno no ha rechazado hasta ahora la adopción de medidas directas para grandes empresas.

De la mano de su concepto de «cuarentena dinámica», el Gobierno ha intentado hasta ahora encontrar un equilibrio entre afrontar los desafíos sanitarios de pandemia y una actuación decidida contra el virus, sin perder de vista por completo la evolución económica. De este modo, se ha seguido trabajando en áreas no esenciales, como la industria alimentaria, parcialmente en la construcción, así como en el área de servicios. En vista de las crecientes cifras de contagio, se exigen medidas de mayor calado.

Los sondeos muestran actualmente que, hasta ahora, una gran parte de la población apoya la gestión de la crisis del Gobierno. Los llamamientos de dimisión del presidente Piñera, que se hicieron patentes entre octubre y enero, se han ido difuminando. La preocupación inminente por la salud y los puestos de trabajo han desbancado del orden del día social a las exigencias de un nuevo sistema y un cambio constitucional. Debido a la crisis, el Gobierno y el Parlamento acordaron el aplazamiento del referéndum sobre la redacción de la nueva Constitución, previsto para finales de abril, hasta octubre de 2020.

Queda por ver si el cambio en las prioridades es solo temporal. En la fase preliminar del cambio constitucional, a lo más tardar, volverán a la agenda política temas candentes como la reforma de las pensiones y las reformas sanitaria y educativa. Los últimos sondeos indican que la clara mayoría de los ciudadanos está a favor de redactar una nueva Constitución.

Aunque Chile saliera mejor parado de la crisis del coronavirus que otros países, el país se enfrenta con gran probabilidad a un largo camino de incertidumbres que podría causar a una crisis económica prolongada y encender la mecha de un estallido social.

Uruguay

Sebastian Grundberger y Thomas Schaumberg

El arranque del brote del coronavirus en Uruguay coincidió prácticamente con el cambio de Gobierno. Menos de dos semanas antes de la investidura del Gobierno conservador del presidente Luis Lacalle Pou el 13 de marzo de 2020, se detectaron los primeros casos de la

enfermedad. Desde el comienzo de la crisis, el Gobierno ha seguido una línea clara que ha mantenido hasta el día de hoy. Los elementos esenciales de su estrategia han sido el llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y una comunicación transparente.

Uruguay cerró muy pronto las fronteras, escuelas, centros comerciales y organismos públicos. Más tarde decretaron la obligatoriedad de llevar mascarilla en supermercados y en el transporte público. En ningún momento ha habido cuarentena obligatoria, restricción del contacto social o una disposición general para cerrar restaurantes y el comercio minorista. En lugar de eso, el presidente Lacalle Pou ha apelado siempre a la libertad responsable para que los ciudadanos siguieran las recomendaciones de su Gobierno.

El Gobierno lanzó una amplia campaña de información e hizo un llamamiento a la población para que salieran de casa lo menos posible y no viajaran a otras regiones del país. Carteles y anuncios inundaron todo el país con el lema *Quédate en casa* y explicaban las reglas higiénicas a tener en cuenta. Las fuerzas del orden ponían el foco en las medidas de distanciamiento social y repartían mascarillas. Estas medidas estuvieron acompañadas de una aplicación de móvil voluntaria. Esta aplicación se utilizó en un primer momento solo como canal de información, pero se convertirá en una aplicación de rastreo anónimo gracias a la cooperación con Google. Esta cuestión apenas levanta polvo político en el país.

Hay que destacar la regular y transparente comunicación del Gobierno. En los primeros días de la pandemia tuvieron lugar diariamente ruedas de prensa en las que el presidente mismo o miembros de su gabinete informaban sobre las cifras actuales y las más recientes medidas adoptadas. Después se fueron espaciando las conferencias de prensa y se evitó consecuentemente cualquier retórica triunfalista, mientras el presidente subrayaba que la evolución positiva era el resultado de la disciplina mostrada por la ciudadanía.

La «vía uruguaya», como denominó Lacalle Pou su estrategia, ha dado hasta ahora sus frutos. No ha habido ningún día con más de 50 nuevos contagios, aunque la capacidad de realizar test se amplió a más de 1.000 pruebas diagnósticas diarias. Hasta el 17 de mayo se contaron un total de 734 pacientes confirmados y 20 fallecidos en una población de 3,4 millones de habitantes. Estas cifras son altamente positivas en la comparativa con el resto de países latinoamericanos.

Solo después de que las nuevas infecciones diarias confirmadas se hubieran reducido a diez, se puso en marcha con precaución la reapertura de la vida pública y de algunos sectores económicos. Los restaurantes, cafés, fábricas, el comercio minorista y los organismos públicos volvieron a abrirse, mientras se aplicaban los protocolos de higiene (distancia de dos metros, mediciones de temperatura, uso obligatorio de mascarillas). También las escuelas se irán abriendo progresivamente. Entretanto se observa una creciente despreocupación entre los ciudadanos en el seguimiento de las recomendaciones higiénicas.

Uruguay fue el primer país de la región en reducir temporalmente los salarios de los empleados públicos, incluidos el del presidente y los del equipo de Gobierno, llegando incluso a bajarlos un 20 %. Los recortes se emplearon en el fondo para el coronavirus con el que se financian los pagos de prestaciones sociales como la jornada laboral reducida o las ayudas para las pequeñas empresas. Debido a estas medidas, como los paquetes de ayuda para población desfavorecida y los empleados en el sector informal, la oposición exigió en vano expropiaciones, impuestos especiales, un ingreso mínimo sin condiciones y el confinamiento total. Muy al contrario, el Gobierno pudo claramente beneficiarse de ello.

Entretanto aumentó el índice de aceptación del Gobierno de Lacalle en las encuestas hasta alcanzar un 65 %, mientras que solo el 20 % de los encuestados evaluaban negativamente el trabajo del Gobierno.

En total, la crisis del coronavirus ha demostrado tener poco potencial de división social. El punto principal de crítica al Gobierno ha sido hasta ahora que, a pesar de la crisis del coronavirus, se mantuvo firme y presentó al Parlamento en procedimiento rápido un amplio paquete legislativo sobre seguridad, educación y economía que se discutió en sesiones maratónicas.

En cuanto a la dimensión internacional de la crisis, Gobierno y opinión pública se mostraron especialmente preocupados por la situación en Brasil, con el que comparten algunas localidades y cuya frontera no puede cerrarse por completo. Las noticias sobre las cifras de contagio de otros países, así como la errática actuación del presidente norteamericano, contribuyeron seguramente a que los uruguayos siguieran las recomendaciones del Gobierno. Si bien China les ofreció material médico y el embajador chino informó al presidente de la experiencia vivida en su país, esto solo supuso una nota al margen en la percepción pública. No hay que temer pues una deriva autoritaria en el estilo del Gobierno uruguayo, ni tampoco una nueva orientación de la política exterior como consecuencia de la crisis. La política interior del Gobierno uruguayo se basa en el multilateralismo, el comercio libre internacional y la integración regional. Se espera también que Uruguay, más pronto que tarde, esté dispuesto a abrir de nuevo sus fronteras.

La covid-19 en los países andinos

Dr. Christina Stolte

Las primeras medidas para combatir la propagación del coronavirus en los países andinos fueron adoptadas ya en el mes de marzo. Además de cerrar las fronteras y suspender el tráfico aéreo, se adoptaron estrictas medidas de aislamiento en todos los estados de la región, que siguen restringiendo masivamente la libertad de movimiento de la población pese a la desescalada progresiva en sectores económicos relevantes. Puesto que la población es consciente de la enorme amenaza que supone la epidemia de la covid-19 para sus países debido a las deficiencias de los respectivos sistemas sanitarios, estas medidas han sido acogidas con amplio apoyo popular.

Aunque el periodo de confinamiento de dos meses ha tenido consecuencias desastrosas para muchos, la situación en todos los estados de la región ha sido asombrosamente calmada. Hasta ahora no se han registrado grandes protestas sociales por las medidas adoptadas. Esto es sin duda destacable dado que la crisis del coronavirus en algunos países como Venezuela o Bolivia no solo constituyen una amenaza sanitaria, sino también un auténtico polvorín político.

Si bien se ha logrado hasta ahora frenar la propagación del virus en los países andinos gracias a las severas medidas tomadas, exceptuando unos pocos focos de contagio, hay que resaltar que las economías de la región están pagando un precio altísimo en la lucha contra el virus: la totalidad de los países esperan un desplome de su rendimiento económico y un fuerte ascenso de la pobreza como consecuencia de la crisis del coronavirus. La tasa de mortalidad de la pandemia será a largo plazo probablemente más elevada de lo que permiten suponer las cifras directas de contagio y fallecidos.

Colombia

Stefan Reith

Desde el primer caso confirmado por infección de coronavirus en Colombia el pasado de 6 de marzo, el ministerio de Sanidad ha registrado 14.216 contagios y 546 fallecidos (actualización 15.5.2020). No obstante, la *cifra negra* entre los aproximadamente 50 millones de habitantes podría ser mucho más elevada. La capacidad para realizar test es muy limitada, de hecho, hasta mediados de mayo solo se habían realizado un total de 130.000 pruebas diagnósticas. El sistema sanitario y las capacidades de los laboratorios fuera de los núcleos urbanos son precarios. La mayor parte del país es inaccesible a causa de su geografía y de los conflictos armados vigentes desde hace décadas. En las zonas periféricas del país no hay una significativa presencia pública y el sistema sanitario solo funciona parcialmente.

El Gobierno del presidente Iván Duque ha reaccionado con rapidez y decisión en esta crisis. El 13 de marzo se declaró una cuarentena preventiva para viajeros procedentes de China, España y Francia. Pocos días después se cerraron las escuelas y universidades, así como las fronteras nacionales. Desde el 25 de marzo se mantiene una cuarentena estricta en todo el país, que ha sido prolongada en varias ocasiones y que tendrá validez hasta el 25 de mayo. El tráfico aéreo regular e internacional está suspendido hasta nueva orden. Estas medidas deberían contener notablemente la fuerte propagación del virus. Pese a considerar las posibles cifras negras, se está muy lejos de los 3,9 millones de casos previstos en los cálculos hechos por el Gobierno en un escenario sin restricciones de contacto.

Con una lista de decretos, el Gobierno intenta mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis. Mediante un fondo de garantía nacional, las empresas recibieron créditos para poder afrontar el pago de los salarios y evitar despidos masivos. Las familias con rentas bajas recibieron ayuda de emergencia. Se ampliaron los programas sociales públicos destinados a jubilados y familias. Se condonaron parcialmente pagos de mensualidades de electricidad, agua y gas. Para la devolución de hipotecas y créditos, el Gobierno decretó un aplazamiento. Las inversiones realizadas en el insuficientemente financiado sistema sanitario, así como las medidas sociales y económicas adoptadas fueron financiadas por el Gobierno mediante endeudamiento en los mercados financieros internacionales y la creación de un fondo de rescate que se alimenta, entre otros, de un fondo de pensiones para funcionarios y empleados públicos. Se han aceptado parcialmente las solicitudes de crédito en el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo cuya suma asciende a un total de 12 mil millones de dólares.

Hasta ahora, la gestión de la crisis del Gobierno goza de la confianza de la ciudadanía. Los bajos índices de popularidad del presidente Iván Duque previos a la crisis han mejorado notablemente. Según los actuales sondeos, una mayoría de colombianos por primera vez se decanta positivamente por su gestión de Gobierno. A través de boletines vespertinos, el presidente de la nación informa personalmente a los ciudadanos sobre el desarrollo actual y las medidas aprobadas. Hay un sitio web que suministra datos actualizados sobre la crisis que sirve como importante plataforma informativa. Mientras gobernadores y alcaldes, especialmente su adversaria política la alcaldesa de la capital Claudia López, exigían al principio al presidente que impusiera una cuarentena estricta, la estrategia de Duque de establecer la cuarentena inteligente goza de amplia aceptación. Diversos sectores económicos, como la construcción o la industria de producción, pudieron volver a estar operativos. Actualmente se discuten otras medidas de desescalada para reactivar la

economía. Algunos expertos critican que las medidas de desescalada son prematuras y prevén que el pico epidémico no llegará hasta junio o julio. Los desafíos a los que se enfrentaba Colombia antes de la pandemia podrían convertirse en una gran carga para el país.

El punto débil central lo constituye el sector informal, en el que trabaja aproximadamente el 50 % de la población activa. La mayoría de ellos carece de seguridad social y la crisis sanitaria y económica les afecta de lleno. Otra fuente de preocupación son los oficialmente 1,8 millones de refugiados venezolanos. Miles de ellos carecen de ingresos desde la crisis y, a pesar de la dramática situación en su país, han empezado a abandonar Colombia para regresar a Venezuela. Los movimientos migratorios son prácticamente incontrolables e incrementan el riesgo de contagio, tanto de los propios refugiados como de la población local. En numerosos puntos han tenido lugar incidentes xenófobos contra venezolanos que son percibidos por la población local cada vez más como una amenaza. También el ya de por sí frágil proceso de paz está amenazado por la pandemia. Los medios de comunicación informan que grupos criminales, especialmente el ELN, han incrementado significativamente el reclutamiento de jóvenes y han aprovechado así la situación para ampliar su influencia en las regiones y sustituir al Estado. Las amenazas y asesinatos de líderes sociales a manos de estos grupos han aumentado en relación con el año anterior puesto que dichas personas son blancos fáciles durante el periodo de cuarentena. Los principales focos de la crisis del coronavirus podrían ser, particularmente, las zonas fronterizas con Venezuela y Brasil. El sistema sanitario venezolano hace tiempo que colapsó, de modo que se puede extender fácilmente una ola de contagios por la vulnerable frontera de 2.000 km de largo con Colombia. En el sur, el virus se propaga desde Manaus, a lo largo del Amazonas, hacia Colombia. En la región amazónica colombiana, apenas se dispone de camas para cuidados intensivos, kits para test o respiradores.

A lo largo de las próximas semanas se comprobará si la estrategia del Gobierno de una cuarentena inteligente, es decir, distanciamiento social y medidas de protección aparejadas con una simultánea reactivación de la economía, surtirá el efecto deseado pese a estos desafíos.

Venezuela

Maximilian Hedrich

La crisis del coronavirus en Venezuela ha agravado aún más la ya existente crisis social, política y económica. Después de que fueran detectados los primeros casos de covid-19, el régimen socialista en Caracas declaró estrictas medidas preventivas. A partir del 14 de marzo se suspendieron los vuelos, primero internacionales, y finalmente también los nacionales. Estas primeras medidas surtieron efecto y evitaron en un primer momento que se produjera un brote fuerte del virus. Según las cifras oficiales, hay unos 500 casos confirmados y 10 fallecidos. Los expertos dudan de la veracidad de dichos datos.

Por el momento han sido cerradas las fronteras con Venezuela por parte de los Gobiernos colombiano y brasileño. El 16 de marzo se declaró en Venezuela el estado de alarma, que ha sido entretanto prolongado hasta el 13 de junio. El Estado ha adoptado estrictas medidas de cuarentena. El uso de mascarillas es obligatorio en el espacio público. Los comercios están cerrados, con la excepción de los comercios de alimentación y las farmacias, el resto del

curso escolar se suspendió y en algunos estados y municipios se declaró la cuarentena social. Estos estados y municipios están parcialmente controlados por el Ejército y las milicias.

Para una gran parte de los venezolanos, estas restricciones son prácticamente imposibles de cumplir. Muchos trabajan en el sector informal y dependen de su escaso jornal diario para mantener mínimamente su precaria situación. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estima que uno de cada tres venezolanos sufre de inseguridad alimentaria, de los cuales más de dos millones de venezolanos lo hacen de forma aguda. En vista de la amenaza inminente de una hambruna, el Estado venezolano decidió en abril introducir de nuevo el control de precios para 27 productos de necesidad diaria. Además, el Gobierno socialista de Caracas anunció que en el futuro «se haría cargo» de algunas empresas y controlaría la venta de productos de los tres mayores productores alimentarios. Esto ha vuelto a conducir, como ya lo hizo en el pasado, a una inflación galopante y a que escaseen algunos productos importantes, como la harina de maíz o los huevos. Más del 79 % de los venezolanos manifiestan notar la escasez de productos básicos en los supermercados.

A la crisis de suministro hay que sumar el constante deterioro de las infraestructuras públicas. El 40 % de los venezolanos sufren cortes de electricidad, más del 70 % no dispone de suministro regular de gas y alrededor del 25 % no tienen acceso al agua potable. A pesar de las estrictas medidas de cuarentena, una gran parte de la población debe salir por tanto de casa en busca de agua, gas y alimentos. En paralelo a la crisis del coronavirus, el país más rico en petróleo del mundo sufre una grave crisis de suministro de gasolina. La crisis de infraestructuras y gasolina tienen consecuencias nefastas, tanto para el sistema sanitario como para el suministro de alimentos.

Las limitaciones de movimiento son acogidas y adoptadas de manera diversa entre los grupos sociales. Los sectores más vulnerables siguen menos las reglas, pero están controlados con mucha más determinación por las fuerzas de seguridad. La realidad de la población en el interior del país es muy distinta a la de la región de Caracas. La Policía y la Guardia Nacional vigilan estrictamente el movimiento de las personas en el interior del país, empleando la violencia en ocasiones. En Caracas, en cambio, la libertad de movimiento, especialmente el peatonal, es mucho más amplia, particularmente en aquellos barrios de clase media-alta. En los inmensos barrios pobres de la capital, las milicias armadas se han hecho con el control de la vida cotidiana. El grueso de la población observa con gran preocupación cómo se va prolongando el estado de alarma, ya que muchos, tanto ricos como pobres, no pueden sostenerse económicamente durante más tiempo.

Pese a la agitación por la situación de hambre y las caceroladas en algunas ciudades del país, no han tenido lugar grandes movilizaciones organizadas. Los actos de protesta y rapiña son más bien la consecuencia indirecta de la crisis de la covid-19. En realidad, son expresión de la lucha por la supervivencia de la población más vulnerable, que ha perdido la última posibilidad de asegurarse una existencia mínima a través del trabajo informal.

Las medidas económicas promulgadas por el régimen socialista no han podido mitigar de ningún modo la catástrofe social. Con efecto del 1 de mayo se aprobó por decreto la subida del salario mínimo a 800.000 bolívares, lo cual apenas ha tenido efecto perseguido debido a la galopante inflación. También las ayudas anunciadas a través del *carnet de la patria* (un documento de identidad especial donde se recoge el status socioeconómico y control social del titular) es, de lejos, insuficiente. Con el fin de reforzar el sector sanitario, la Asamblea Nacional legitimada democráticamente bajo el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, aprobó un plan de emergencia nacional. La primera fase del programa lleva el nombre de

Héroes de la Salud y tiene como objetivo apoyar el sector sanitario con 100 dólares americanos por persona a través de una plataforma digital. Hasta ahora se han registrado más de 75.000 personas en ella, aunque la plataforma haya sido bloqueada en numerosas ocasiones.

La crisis del coronavirus ejerce una enorme influencia en la situación política de Venezuela. Para la oposición es extremadamente complicado actuar en estos tiempos. El control es universal puesto que, gracias a las fuerzas de seguridad y el buen funcionamiento de los servicios secretos, el régimen puede gobernar «por completo». Con ello, el régimen de Maduro sale ganando políticamente de la crisis sanitaria pese a la catastrófica situación del país. Gracias al refuerzo violento del control, acaba con cualquier forma de protesta social. En vista de la deteriorada infraestructura y la escasez de electricidad, agua y combustible, la actual crisis del coronavirus ha sido la mejor manera de controlar aún más a la población. Por ello, es probable que la cuarentena ordenada hasta el 13 de junio vuelva a ser prolongada.

Perú

Nicole Stopfer

Perú registró su primer caso oficial de covid-19 el pasado 6 de marzo. Nueve días más tarde, el 15 de marzo, el presidente peruano Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional e impuso medidas mucho más drásticas que cualquier otro país de la región. Además del cierre total de todas las fronteras por mar, aire y agua, y se decretó el distanciamiento social obligatorio. Solamente se permitieron las salidas al supermercado, las visitas al médico o las compras en la farmacia. Estas medidas debían estar vigentes en un principio durante solo dos semanas, pero el estado de alarma se fue prorrogando cada dos semanas e incluso ampliado a un toque de queda nocturno y los domingos.

Es de destacar que la gran mayoría de peruanos valoran positivamente las medidas de aislamiento social de varias semanas a pesar de las graves consecuencias económicas que acarrearán y también aprueban esencialmente la estrategia de frenar la propagación del virus. Según las encuestas, a principios de mayo el 84 % de los ciudadanos abogaba por el confinamiento social obligatorio. Al mismo tiempo, tras más de 60 días de aislamiento, parece que aumenta el número de personas que, pese a las sanciones y detenciones impuestas, incumplen el estado de alarma. También se escuchan cada vez con más fuerza voces críticas provenientes de la política y la economía haciendo alusión a que la identificación tardía de los focos principales del coronavirus en los mercados locales, así como en el transporte público contribuyera a que la cifra de contagios aumentara constantemente a pesar del estricto estado de alarma decretado. A la vista de lo expuesto, las medidas de confinamiento impuestas parecen no tener efecto.

En relación con otros países de la región, la economía peruana parecía estar relativamente bien situada al inicio de la crisis sanitaria gracias a la estricta política fiscal aplicada desde hace años y pudo aprobar un considerable paquete de ayuda económica que incluye inversiones de hasta el 12 % del producto interior bruto. No se han confirmado los temores iniciales de que el estado de alarma pudiera prolongarse continuamente o se impusieran más restricciones con un impacto negativo en las capas sociales más vulnerables y pobres que dieran lugar a malestar social. Con todo, el sector informal, que ocupa al 70 % de la población activa en Perú, es uno de los grandes perdedores de la crisis a largo plazo. Una de

las medidas para paliar el impacto en este grupo social está incluida en el paquete de ayuda y la constituye el reparto de primas a familias necesitadas. Pese a haber obtenido algunos buenos resultados, esta iniciativa no ha podido evitar que numerosas familias hayan regresado a pie a sus provincias de origen por falta de recursos económicos.

También el sector formal ha sufrido grandes pérdidas. Solo en Lima la tasa de desempleo se ha aupado hasta el 9 %, lo que constituye una marca histórica. Los expertos pronostican que la economía peruana se contraerá en dos dígitos. Las medidas de confinamiento han causado graves perjuicios a la economía peruana.

Además del presidente, cuyos índices de aprobación en la crisis del coronavirus subieron hasta el 87 %, entre los ganadores tenemos también un actor externo: China. Con la llegada del coronavirus a Perú y América Latina, el gigante asiático ha entendido las dimensiones del desafío al que se enfrentan las economías de la región y ha sabido posicionarse como potencia y socio importante en la gestión de la crisis sanitaria. Mientras que Perú entre enero y marzo exportó alrededor de 29 millones de mascarillas a China y Hong Kong, con la llegada del virus a Perú, cambió la dirección de la cadena de suministro. La donación de unas 100.000 mascarillas de China posee un carácter muy simbólico, en consonancia con las acciones propagandísticas llevadas a cabo por todo el planeta. Si bien Estados Unidos y numerosos países europeos, entre ellos Alemania, han realizado operaciones de ayuda similares, la repercusión mediática no parece ser la misma.

A finales de abril se aprobó un plan de cuatro fases para la reactivación de la economía peruana. En el curso de la primera fase en mayo, se reabrirá hasta el 70 % de la actividad económica, especialmente los sectores de minería, industria, construcción, comercio y turismo. La reanudación gradual de las actividades debe ser constantemente evaluada por el ministerio de Sanidad. La reapertura sectorial exigía el cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad y de salud que causaron desconcierto, incompreensión e inseguridad al inicio de la primera fase. Requisitos tales como la prohibición de regresar al trabajo en caso de sobrepeso, fueron descartados después de poco tiempo.

La aplicación de rastreo *Perú en tus manos*, lanzada en mayo según el modelo asiático, tiene como objetivo, entre otros, avisar a los ciudadanos de regiones con alta probabilidad de contagio. Esta aplicación constituye un importante instrumento para lograr volver gradualmente a la normalidad, al mismo tiempo que se evitan nuevos contagios. A lo largo de las próximas semanas se comprobará si estas medidas han logrado resolver el dilema entre evitar nuevos contagios y salvaguardar la subsistencia económica.

Bolivia

Dr. Georg Dufner

Para Bolivia la crisis del coronavirus tiene, por dos razones, el potencial de un enorme polvorín social. El primer motivo es estructural debido a los niveles de pobreza del país y el deteriorado sistema sanitario. El segundo motivo se encuentra en la actual coyuntura política: el Gobierno de transición de la presidenta Áñez se enfrenta a una masiva oposición por parte del anterior partido de Gobierno MAS, que controla dos tercios del congreso. Las elecciones presidenciales y para el congreso, previstas en su momento para el 3 de mayo, no se celebraron debido a la crisis del coronavirus. La cita electoral deberá tener lugar, tras continuados esfuerzos de la Administración electoral independiente (Órgano Electoral

Plurinacional), entre mediados del mes de junio y finales de septiembre. El Congreso debería haberlo aprobado, pero no lo hizo por presiones del exilado expresidente Morales. En su lugar, el partido MAS promulgó una ley el 30 de abril, gracias a su mayoría de dos tercios en el Congreso, que impone el aplazamiento de las elecciones hasta el 2 de agosto a más tardar. El Gobierno de Ñez se opone a la ley y a la fecha electoral remitiéndose a la situación pandémica. Tanto en el caso de MAS, como también en el de la coalición de Gobierno *Juntos*, juegan un papel central las consideraciones con fines electorales y la evolución a medio plazo de los resultados de las encuestas.

Entretanto, el Gobierno interino debe tomar decisiones hartamente complicadas desde una posición debilitada, dividido entre la necesidad de contener la pandemia y salvaguardar el bienestar económico y social. El motivo por el que este explosivo cóctel aún no ha estallado es fundamentalmente la división interna de MAS y la paciencia mostrada por la gran mayoría de bolivianos. Este frágil equilibrio puede, sin embargo, desbaratarse con el hundimiento del rendimiento económico, las cada vez más frecuentes discusiones sobre la gestión del Gobierno y el deseo creciente de elecciones y desescalada hacia una nueva normalidad.

El Gobierno ha adoptado medidas drásticas para mitigar la pandemia en Bolivia. La cuarentena impuesta del 22 de marzo al 10 de mayo en todo el país significó grandes limitaciones para la libertad personal. Los bolivianos solo podían salir de sus hogares a pie una sola mañana a la semana (independientemente del número final del documento de identidad) dotados de mascarilla protectora y exclusivamente para realizar compras o ir al médico. A los vehículos solo se les permitía circular si se disponía de un permiso especial. La Policía y el Ejército vigilaron el cumplimiento de las medidas. Las fronteras, las conexiones internacionales y nacionales, así como el transporte público urbano estuvieron interrumpidos hasta el 31 de mayo.

La cuarentena fue incumplida ocasionalmente como provocación directa por parte de grupos cercanos a MAS, pero también por puro desconocimiento, necesidad económica (recolección de cosecha en una agricultura de subsistencia) o debido a la deficiente configuración de las medidas (subsídios económicos en regiones sin infraestructura bancaria). Una mayoría de los bolivianos entendió las medidas como necesarias y razonables, por lo que los índices de aceptación de la presidenta interina han subido en las encuestas. El distanciamiento social, el toque de queda y el despliegue policial y militar se perciben como males necesarios y no son cuestionados por la ciudadanía, con la excepción de los simpatizantes más radicales del expresidente Evo Morales.

Particularmente el ejecutivo parece haberse beneficiado de las circunstancias actuales al haber tomado decisiones coherentes en relación a las cuestiones médicas.

Los principales rivales de Ñez en la campaña electoral pausada (MAS, Carlos Mesa) han padecido la omnipresencia de la presidenta interina. No obstante, a las valoraciones positivas se suma también una crítica directa por endurecer las medidas para limitar la libre expresión mediante el decreto que penaliza la información y opinión contra informaciones falsas durante la crisis del coronavirus (decreto que fue anulado el 14 de mayo). Diversos casos de corrupción, malversación de bienes públicos y la subsiguiente dimisión de dos ministros, dos secretarios de Estado, del presidente de la petrolera YPFB, así como del director del Fondo de Desarrollo Indígena, incriminan al frágil Gobierno interino, mientras la ciudadanía duda de su integridad y de su capacidad para resolver los problemas de la nación.

Desde principios de mayo se hace patente la saturación del sistema sanitario, especialmente en el departamento de Santa Cruz, el más afectado por la crisis pandémica. El Gobierno tiene evidentes dificultades en suministrar el equipo de protección prometido en un principio (mascarillas, respiradores, etc.). También se cuestionan de manera masiva las cifras oficiales. La reducida capacidad para la realización de test, que asciende a menos de 200 pruebas diarias, y las bajas cifras de contagio publicadas que después se incrementaron con rapidez inusitada hacen temer una elevada cifra oculta de casos.

El 14 de mayo fue el día en el que se registró el mayor número de víctimas mortales (14) a causa de la pandemia del coronavirus. La estigmatización y el rechazo que sufren los pacientes contagiados, tanto socialmente como en el sistema sanitario, donde falta equipo médico, formación y ética médica, hace temer lo peor en relación a las cifras potenciales de contagiados.

A partir del 18 de mayo se introducirá la denominada cuarentena dinámica, que permitirá la reapertura gradual de algunas actividades económicas (agricultura, construcción, industria, talleres, servicios de entrega de comida, personal del hogar) en algunas de las provincias menos afectadas por la pandemia en Bolivia. Debe aún aclararse cómo y cuándo se podrán reabrir las escuelas y, particularmente, el transporte público urbano, que en tiempos normales consiste en pequeños autobuses particulares con una alta ocupación, mientras se organiza la desescalada de manera ordenada. Desde el 11 de mayo llegan noticias de algunas ciudades en las que se han dejado de cumplir a rajatabla las reglas de la cuarentena. Con la cuarentena dinámica el Gobierno responde a las repetidas demandas del sector económico, cuyo grueso se encuentra en Bolivia en el sector informal. Con la desescalada se pretende solucionar el dilema entre la cuestión social y la sanitaria. Queda por ver si la necesaria disciplina y el distanciamiento social pueden efectivamente cumplirse en las circunstancias descritas.

La covid-19 en Centroamérica y México

Michaela Braun

En comparación con Europa, algunos países de Centroamérica con sistemas sanitarios y sociales precarios no tienen una respuesta equiparable para hacer frente a la crisis médica y al correspondiente impacto económico y social de la misma. La situación inicial de los países es, no obstante, muy diversa: mientras que Costa Rica, como futuro miembro de la OECD, y México, como miembro de pleno derecho de la OECD, así como el *hub* global Panamá, están económicamente mejor posicionados, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, como Guatemala y Honduras, disponen de menos recursos.

En muchos países no parecen ser evidentes las verdaderas dimensiones de la crisis. Además de la insuficiente realización de pruebas diagnósticas, en México, por ejemplo, se presupone que han fallecido muchas más personas como consecuencia del coronavirus de lo que se conoce hasta ahora. La parcialmente deficiente gestión de la pandemia por parte de los Gobiernos hace mella en la confianza de los ciudadanos en la democracia. Hay que añadir que se aprecian además tendencias autoritarias, como las del presidente mexicano, intentando excluir al parlamento del debate sobre los presupuestos.

El impacto sanitario, social y económico de esta crisis están aún por ver. Si bien, sobre todo en Guatemala, la sociedad se está mostrando francamente solidaria, en otros países de la región la cohesión social podría peligrar a largo plazo. Las restricciones en la vida pública, así

como la inminente crisis económica, tienen un impacto aún más dramático en la población latinoamericana más pobre y en aquellos que forman parte de la economía informal. También las cuestiones de política exterior y de desarrollo serán en el futuro de gran relevancia, puesto que algunos países de la región centroamericana no podrán asumir por sí solos los costes causados por las medidas impuestas, ni amortiguar el impacto de la crisis económica, por lo que dependerán de la ayuda prestada por organizaciones internacionales y países donantes. A este respecto, Estados Unidos, como principal socio comercial, y China, como actor con creciente compromiso en América Latina, podrían jugar un papel esencial.

México

Hans Blomeier y Ann-Kathrin Beck

Con una cifra oficial de 54.346 contagiados y 5.666 fallecidos (actualización 19.05.2020) en una población de 126 millones de habitantes, el Gobierno mexicano anuncia que el coronavirus está controlado. No obstante, al analizar en detalle, la situación es decididamente más complicada. La situación en México es compleja y las verdaderas dimensiones de la crisis, así como las consecuencias sanitarias y económicas aún son difíciles de prever.

No fue hasta finales de marzo que el Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró la emergencia sanitaria nacional e impuso las medidas voluntarias de distanciamiento social. La vida diaria en el entorno laboral y el privado de la mayoría de los mexicanos está, no obstante, muy limitada, puesto que es un país con un sistema federal en el que numerosos gobernadores de entidades federativas y alcaldes reaccionaron antes e introduciendo medidas más severas. Se declaró el estado de alarma, se cerraron lugares públicos y las empresas de actividad no esencial, se establecieron hospitales de emergencia y se pusieron en marcha campañas públicas de información. Sin embargo, las finanzas de las entidades federativas son competencia del Gobierno central, por lo que en las últimas semanas ha habido diversas polémicas entre gobernadores de todos los partidos y el Gobierno mexicano. El presidente rechaza los paquetes de ayuda financiera y las desgravaciones fiscales, hace responsable de la crisis al «sistema neoliberal» por sus carencias y apuesta en cambio por las transferencias financieras directas a las capas sociales más desfavorecidas. Con el fin de mantenerlas de manera ilimitada, no duda en intentar eludir al Parlamento en la elaboración de los presupuestos.

Teniendo en cuenta que la economía mexicana ya estaba inmersa en una crisis antes de la aparición del coronavirus, que el peso mexicano había perdido alrededor del 20 % de su valor con respecto al euro desde febrero, y que se pronostica que la economía se contraerá el presente año en un 6-10 %, es apremiante reducir la carga que pesa sobre las empresas. Ya han debido cerrar unas 200.000 empresas y se puede llegar a perder hasta un millón de puestos de trabajo. A esto hay que sumar que más del 50 % de los 126 millones de mexicanos forman parte del sector informal y que, por lo tanto, no reciben ningún ingreso desde hace varios meses. Se han concedido al menos dos millones de microcréditos para autónomos y pequeñas empresas. Las ayudas adicionales se obtendrán mediante recortes en la Administración pública. Dado que ya se puede anticipar que estas medidas estatales no alcanzarán a cubrir las excepciones y no es previsible que se normalice a corto plazo la vida comercial ni las correspondientes inversiones, el nerviosismo aumenta entre la población.

La infraestructura sanitaria del país también adolece de una gran falta de recursos financieros y presenta grandes carencias en los equipos sanitarios. Las compras de emergencia del Gobierno no se distribuyeron de manera coherente entre las entidades federativas y abundan las acusaciones de nepotismo en la adjudicación de pedidos. Además, la publicación de cifras sobre las camas de hospital disponibles, respiradores y las tasas de mortalidad se ha convertido en un asunto político. Diversos gobernadores y medios de comunicación acusaron al Gobierno de no publicar las cifras reales y de minimizar el impacto de la crisis en México. Y es un hecho que en México no se dispone de información fiable sobre la lucha contra la pandemia: con solo 0,4 pruebas diagnósticas por cada mil habitantes, el país es el triste colista en el ranking de la OECD. Ya existe, no obstante, un plan para la desescalada. Sin embargo, teniendo en cuenta que se basa en un modelo matemático, cuyas previsiones sobre la cifra de contagios y el pico de la crisis tuvieron que ser corregidas en varias ocasiones, y que las cifras de contagio siguen en aumento, la vuelta a la «nueva normalidad» a partir del 1 de junio se antoja un paso arriesgado.

Debido a las numerosas medias verdades y las *fake news* que circulan especialmente en redes sociales, el presidente habla de *infodemia*. Pero precisamente él mismo y su Gobierno no se caracterizan por la transparencia a la hora de informar en las ruedas de prensa diarias y se contradicen con frecuencia. Esto provoca una gran inseguridad entre la población mexicana y fue el motivo por el que los índices de aprobación del Gobierno cayeron por primera vez por debajo del 50 % desde su investidura. La oposición solo consigue sacar provecho político en las entidades federativas, donde la buena gestión de la crisis por parte de alcaldes y gobernadores es apreciada entre los votantes.

Al menos la crisis ha empujado al Gobierno a iniciar un diálogo político internacional.

El presidente participó de manera virtual por primera vez en la cumbre del G20, impulsó una resolución en Naciones Unidas para tratar de impedir la especulación con material médico necesario para responder a la pandemia del coronavirus y evitar su acaparamiento, y cooperó con Gobiernos de la región para el retorno de refugiados. La relación con los Estados Unidos sigue siendo irregular. Por un lado, hubo conversaciones telefónicas entre ambos presidentes, un suministro de respiradores y una acción conjunta en OPEC+ y, además, los recolectores mexicanos están exentos de la suspensión de la entrada de inmigrantes al país. Por otro lado, el presidente norteamericano, Donald Trump, alabó de nuevo en Twitter su proyecto del muro, que en su opinión protegería de contagios en caso de duda. Además, es cuestionable cómo la industria mexicana va a poder cumplir los requisitos del tratado de libre comercio entre México, E.E.U.U. y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el 1 de julio, ni satisfacer las exigencias del tratado UE-México. El tratado T-MEC incluye una cláusula que regula los tratados de libre comercio de las partes con países «sin mercados libres». Según la interpretación de Estados Unidos, esto afecta sobre todo a China. Sin embargo, China es el segundo socio comercial más importante de México y la cooperación se han intensificado incluso aún más en los últimos tiempos: México espera aprox. 120 toneladas de equipo médico proveniente de China y ha habido manifestaciones públicas de condolencia por parte del Gobierno mexicano.

Queda por ver qué efecto tiene este acercamiento en la relación entre Estados Unidos y México.

Guatemala

Dr. Rudolf Teuwsen

El Gobierno investido en Guatemala poco antes de la llegada del brote ha gestionado la crisis de la pandemia covid-19 con gran compromiso y notable equilibrio. El presidente Alejandro Giammattei ha hecho de este asunto su bandera y, como él mismo reitera, actúa «como médico y como presidente». Cada día informa por televisión y a través de redes sociales de las nuevas estadísticas y de las medidas adoptadas por su Gobierno. Medidas que han demostrado comparativamente un alto grado de eficacia. Se han registrado hasta ahora más de mil casos de contagio en una población de 16 millones de personas, es decir, una cifra muy baja a escala global. En cuanto a las cifras de letalidad (2,4 % en comparación con el 6,9 % mundial), Guatemala registra una baja tasa si la comparamos con la del resto de países.

Los ciudadanos se están mostrando comprensivos y cooperativos en esta situación de excepción, aunque particularmente la población de las áreas rurales expresa su descontento respecto a los inmigrantes expulsados por Estados Unidos y México, la mayoría de los cuales son pacientes confirmados que deben guardar cuarentena tras su llegada al país. No obstante, en gran parte del país los ciudadanos destacan por su disponibilidad para ayudar y su actitud solidaria. En los supermercados se recogen alimentos para donar, los restaurantes distribuyen comidas gratuitamente a personas necesitadas y se están construyendo cinco hospitales de campaña gracias a la financiación a través de donativos de grandes empresas.

No obstante, para un país como Guatemala, cuyo presupuesto nacional no permite grandes márgenes de actuación a causa de los escasos ingresos fiscales, las consecuencias económicas y sociales de la epidemia son enormes. Las medidas de confinamiento imposibilitan que muchas personas activas en el sector informal puedan ganarse la vida. Para las 200.000 familias más afectadas el Gobierno ha puesto en marcha un programa de suministro de emergencia. El pasado mes de abril recibieron un paquete de alimentos y desde mayo cobran mensualmente 1.000 GTQ (unos 120 euros), para poder realizar las compras más urgentes y hacer frente a las facturas ineludibles. Para este programa se dispone de 11 mil millones de GTQ (aprox. 1,3 millones de euros). Con otra inyección de 3,6 mil millones de GTQ (unos 424 millones de euros) el Gobierno insufla ayuda a las empresas y empleados azotados por la crisis. Adicionalmente se introdujo un instrumento similar a una jornada laboral reducida, que permite a empresas y empleados suspender temporalmente los contratos de trabajo de acuerdo mutuo. La iniciativa debe partir del empleado, que entonces percibe una ayuda gubernamental diaria de 75 GTQ (unos 9 euros) como reemplazo salarial y sin perder su puesto de trabajo. Entretanto ya han sido unas 70.000 personas las que se han acogido a esta medida y hasta ahora no ha habido ninguna ola de despidos.

El objetivo de reiniciar de nuevo las actividades económicas a partir de mediados de mayo podría no realizarse debido a las crecientes cifras de contagio. En este punto, el Gobierno apuesta abiertamente por la protección de la salud frente a la economía. Puesto que las empresas puedan seguir operando en parte bajo cumplimiento de las medidas de higiene y protección, esta prioridad no ha sido apenas criticada. A ello contribuye sin duda que el Gobierno se esfuerza a través del diálogo por incluir en las decisiones a representantes de la empresa y la sociedad. Giammattei ha reaccionado sin embargo con disgusto a la actitud del Congreso en esta situación de excepción: las decisiones sobre presupuestos

complementarios no se tomaron con la debida celeridad y se cita con demasiada frecuencia, en su opinión, a los representantes gubernamentales para que comparezcan en sede parlamentaria. En conjunto, ha logrado con éxito organizar mayorías decisiones importantes en el Congreso. Las críticas procedentes de otros órganos de control (personal de derechos humanos, Tribunal de Cuentas) o de organizaciones no gubernamentales las ha asumido hasta ahora de manera constructiva.

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia a largo plazo en Guatemala no pueden ser pronosticadas con seguridad. Existe un gran espíritu emprendedor y una asombrosa capacidad de innovación en el país. El FMI predice un retroceso relativamente bajo del rendimiento económico del 2 % para el año 2020; en su momento, el crecimiento previsto había sido de alrededor del 3,5 %. El déficit presupuestario podría llegar a 12 mil millones de GTQ (unos 1.400 millones de euros) y con ello se incrementaría enormemente el endeudamiento público. En este momento se sitúa en aprox. el 26 % del producto interior bruto y se pronostica al menos un 30 %. La agencia de rating Fitch ha bajado en un punto la calificación de deuda de Guatemala, mientras que su competidora, Standard & Poors, no ha dado este paso.

Honduras

Dr. Rudolf Teuwsen y Severin Harpf

Después de confirmarse en Honduras el primero caso de coronavirus el pasado 11 de marzo, el Gobierno impuso el 16 de marzo estrictas medidas de confinamiento que siguen vigentes hasta hoy y que significan la suspensión de todas las actividades no esenciales en el sector público y el privado. Pese a que, en la comparación global, las cifras bajas de pacientes confirmados y muertes pudieran parecer más bien bajas, Honduras es uno de los países más azotados por la pandemia en la región centroamericana.

En un país con niveles extremos de pobreza, las estrictas reglas de confinamiento causan graves problemas de subsistencia entre la población más desfavorecida. El grueso de la población activa vive de los ingresos que perciben diariamente. Esta problemática alberga, en relación con el deficiente estado del sistema social estatal, un enorme potencial de conflicto social a largo plazo, si bien hasta ahora no se han registrado los temidos disturbios sociales.

La gestión de la crisis por parte del Gobierno presenta claras deficiencias. Aunque el parlamento ha aprobado un nuevo endeudamiento de 2,5 mil millones de dólares para combatir la pandemia y se ha incrementado el presupuesto para el sector sanitario, hubo recientemente acusaciones de malversación de fondos en la adquisición de equipo médico contra autoridades del equipo de crisis público. Según las estimaciones, las pérdidas económicas del erario público ascienden a unos 2,2 millones de euros. Los funcionarios acusados y los fabricantes favorecidos son los grandes ganadores de la crisis, puesto que, en vista de las debilitadas autoridades judiciales y su limitado margen de actuación, es improbable que se lleguen a aclarar de manera detallada las acusaciones de corrupción. Esto supondría pérdidas importantes para la renovación del obsoleto sistema sanitario. La población hondureña, especialmente aquellos contagiados de covid-19, y el personal médico serían la otra cara de la moneda: los perdedores de la crisis. Otra persona que puede haberse beneficiado de la crisis es el presidente, Juan Orlando Hernández. Éste fue inculpado recientemente por las autoridades judiciales estadounidenses de participación en negocios de drogas ilegales. En caso de hacerse públicos los cargos, los críticos del Gobierno

temen que el jefe de Estado mantenga el estado de emergencia general y suspenda las elecciones presidenciales del año próximo para mantenerse en el cargo y así protegerse al amparo de su inmunidad. Además, la crisis podría ofrecer una excusa al jefe del Estado para desviar la atención de otros abusos sociales o económicos.

El Gobierno está intentando el reparto de paquetes de alimentos básicos entre las capas más desfavorecidas de los barrios marginales. Si bien es cierto que las ayudas no llegan a todas las personas necesitadas debido a la deficiente organización del reparto. También crecen las protestas en cuanto a la instrumentalización del reparto de comida como «medio de presión» para el partido. Aunque el suministro parece llegar al grueso de los barrios pobres, se vinculan las crecientes cifras de contagio a que la mayoría de la población pobre simplemente no puede cumplir las reglas de confinamiento. Efectivamente, la necesidad de ganar un par de lempiras (moneda nacional) para adquirir alimentos es enorme. Como medida contra la amenaza de pérdidas de puestos de trabajo para aquellos trabajadores del sector formal cuyo trabajo fue suspendido, el Gobierno ha introducido una especie de jornada laboral reducida. A las empresas del sector formal que no despidan a sus empleados durante la crisis, se les concede una desgravación fiscal del 10 %. La gran mayoría de los trabajadores del sector informal (aprox. 80 %) no puede disfrutar de dichas medidas. Hasta ahora ha habido unos 100.000 despidos en todo el país.

Una vuelta a la normalidad en Honduras aún no es previsible. A causa de las gravísimas consecuencias económicas que se perfilan por la crisis del coronavirus, crece la necesidad imperiosa de arrancar progresivamente las actividades económicas (pronóstico de crecimiento 2020: -2,3 %). La introducción de un fondo de crédito nacional para pequeñas y medianas empresas está encaminada a ello. A ello hay que sumar que el sistema nacional de bancos concede facilidades crediticias a empresas y particulares.

Representantes del sector privado han presentado al Gobierno un plan para la reapertura progresiva de las actividades económicas bajo cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios. En vista de la falta de mecanismos de control y *know-how*, es incierto si se podrán cumplir dichos requisitos. En relación a la cooperación internacional, los Estados Unidos, en calidad de socio comercial principal, juegan un papel esencial para el estímulo de la debilitada economía hondureña. Estados Unidos ha apoyado al país centroamericano económicamente y con la donación de equipo médico para la contención de la pandemia.

Costa Rica

Evelyn Gaiser

Tras la confirmación el pasado 6 de marzo del primer caso de coronavirus en Costa Rica, la política reaccionó con rapidez. Desde el 17 de abril desciende el número de contagiados y el país registra una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. Los factores fundamentales de esta exitosa gestión fueron el sólido sistema sanitario, la eficiente reacción del Gobierno, la excelente cooperación institucional de las autoridades y el cumplimiento estricto de las medidas por parte de la población.

En Costa Rica se aprovechó la llegada tardía del virus para prepararse debidamente para la pandemia. Al convocar el estado de emergencia nacional el pasado 16 de marzo, se cerraron las fronteras del país y se redujo la vida pública a mínimos. Se cerraron las playas, los parques nacionales y las escuelas. Al mismo tiempo, el país no decretó un estado de alarma total y se concentró en restringir el tráfico de vehículos. La población se mostró disciplinada:

según una valoración obtenida a través de datos de teléfonos móviles, la presencia en tiendas, centros turísticos, playas y parques descendió en un 82-84 %. Costa Rica destaca en la región por haber gestionado la crisis con espíritu innovador y personal especializado con una formación excelente en el área de tecnología médica. La estrecha colaboración entre instituciones privadas y públicas hizo posible que se lograra soluciones avanzadas, incluido el desarrollo de un equipo de protección con ayuda de impresoras 3D y el establecimiento de un hospital especializado en casos de covid en solo once días. A esto hay que sumar la intensa cooperación con instituciones multilaterales, como la *Initiative Act Accelerator* de la OMS, que ofrece un mecanismo para acceder a tecnología relevante en la lucha contra la propagación del virus a propuesta de Costa Rica.

También en Costa Rica la dimensión sanitaria y política choca con los intereses económicos. Debido a las medidas adoptadas para frenar el virus, numerosos sectores de la economía se encuentran paralizados. El Banco Mundial pronostica que el producto interior bruto del país se desplomará en un 3,3 %. En el primer trimestre de 2020 el desempleo se disparó hasta la cifra récord de 12,5 %. Para el alrededor de millón de costarricenses que antes del brote de la pandemia trabajaban en el sector informal, la situación es especialmente precaria. Las grandes desigualdades sociales se han ahondado aún más en el país. Mientras una parte de los ciudadanos con trabajos de oficina, podían seguir trabajando desde casa, aquellos con los ingresos más bajos perdían su trabajo. El sector más azotado es el turismo, en el que trabaja el 13 % de la población y que en abril dejó de recaudar 365 mil millones de dólares. La época de cuarentena fue empleada por muchas empresas para establecer las bases del más alto estándar higiénico. Cuando los viajes internacionales vuelvan a ser posibles, esto beneficiará sin duda a la reputación de Costa Rica como destino turístico.

En vista de las tasas de contagio descendentes y la cada vez más complicada situación económica, a partir del 1 de mayo dio comienzo el periodo de desescalada, dividido en cuatro fases de 80 días respectivamente. Las fronteras permanecerán cerradas al menos hasta el 15 de junio y las iglesias y escuelas serán las últimas instituciones que se reabran y solo bajo condiciones muy estrictas. Siguen en vigor las reglas de distanciamiento social y las recomendaciones de llevar mascarilla protectora en lugares públicos. Actualmente se está valorando el uso de una aplicación de rastreo de casos de covid-19. La aplicación funcionaría solo con la aprobación del usuario y mediante tecnología Bluetooth. Se está discutiendo la conversión de la aplicación existente al historial médico digital de la Tesorería de la Seguridad Social costarricense, lo que tendría como ventaja que el 38 % de la población ya tiene instalada dicha aplicación en sus teléfonos móviles. No obstante, si bien Costa Rica ha logrado aplanar la curva, los expertos indican que la pandemia aún no está controlada. La baja tasa de contagio tiene como contrapartida la reducida inmunidad entre la población. El 13 de mayo aumentó de nuevo ligeramente el número de pacientes contagiados. De especial riesgo es la frontera con Nicaragua, que se antoja difícil de controlar. En Nicaragua apenas se han tomado medidas contra la pandemia y la covid-19 se propaga en el país de manera descontrolada.

La buena gestión de la crisis sanitaria en Costa Rica se refleja en los índices de aprobación del presidente, que se dispararon del 22 al 65 %. Al agudizarse la crisis económica, sin embargo, podrían volver a primer plano de nuevo los problemas ya existentes antes del brote de la pandemia y que fueron el motivo de los bajos índices de popularidad en los sondeos. Entre ellos, el elevadísimo coste de vida y las altas tasas de desempleo. Un desafío inminente lo constituye además la financiación de las medidas contra el coronavirus. El margen económico de actuación de Costa Rica es muy limitado debido a la complicada posición inicial. En este aspecto, el país depende de las ayudas de instituciones internacionales. Los expertos económicos tienen la esperanza de que, con ocasión de la

pandemia y la consecuente crisis económica, el Gobierno ponga en marcha medidas que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo, como son la racionalización del inflado aparato estatal, la apertura de nuevos sectores económicos para la competencia o la refundición del elevado endeudamiento.

Panamá

Winfried Weck y Hannah Freericks

Exceptuando un error de bulto cometido al principio de la crisis, el Gobierno panameño ha gestionado la lucha contra el coronavirus de manera consecuente. Se declaró el estado de emergencia nacional, se suspendió por completo el tráfico aéreo comercial, se cerraron las fronteras y se impuso el estado de alarma en todo el país. En el marco de Centroamérica, Panamá ha actuado hasta ahora de manera ejemplar. El motivo podría residir en su independencia económica, mucho mayor que los demás países del entorno. A pesar de ello, se avecinan también aquí problemas políticos, económicos y sociales.

Aunque Panamá ya había publicado a finales de enero un plan de prevención para contener la covid-19 y se habían implementado medidas de vigilancia epidémica a los viajeros, no fue hasta la segunda semana de marzo que la población se hizo eco de ello. El 8 de marzo murió de una dolencia pulmonar que había padecido tres semanas antes, el director de una de las mayores escuelas del país, con más de 4.200 alumnos y 600 profesores. No fue considerado como un posible caso de covid-19, puesto que no había viajado con anterioridad. Un día después, Panamá confirmó el primer caso (una panameña que había llegado de España dos días antes). Entretanto el test realizado al director de la escuela también dio positivo. Esto significaba que el virus había llegado a Panamá mucho antes de lo que suponía el Gobierno y podía haberse extendido durante los carnavales de manera inadvertida. Después de dar a conocer el error cometido, la actitud del Gobierno y de la población cambió radicalmente. La covid-19 se convirtió en prioridad. Se adoptaron con celeridad las recomendaciones de las organizaciones de salud internacionales. El presidente impuso el estado de emergencia ya el 13 de marzo, es decir, solo cuatro días después del primer caso oficialmente confirmado. Se cancelaron diversos eventos, se suspendieron las clases en colegios y universidades, se recomendó trabajar desde casa a los empleados de oficina y se cerraron todos los comercios. Solo los supermercados, los centros de salud, las farmacias y las gasolineras permanecen abiertas. El presidente impuso el 18 de marzo el estado de alarma parcial y desde el 25 de marzo, total. En numerosos puntos estratégicos de la capital y a lo largo de la Panamericana se realizan estrictos controles y se imponen altas sanciones en caso de incumplimiento. La presencia policial aumentó notablemente, después de que, en las primeras noches del confinamiento total, se registraran actos vandálicos de quema de neumáticos y saqueos en pequeños comercios. Aunque la mayoría de los panameños acepta y apoya las medidas del Gobierno, cada día hay cientos de personas que ignoran el toque de queda.

La economía de Panamá presenta, gracias al canal, a la ubicación de la Ciudad de Panamá como centro bancario y a ser una de las mayores minas de cobre del mundo, una mayor diversidad económica que los demás países de la región. Sin embargo, las consecuencias de la crisis de la covid-19 para la economía, para la que se pronosticaba el crecimiento más débil desde 2009, son dramáticas.

El déficit presupuestario aumentará a causa de la epidemia, según las estimaciones del FMI, en unos 3,7 mil millones de dólares, que solo en el año 2019 había ascendido en 5 mil

millones de dólares, hasta alcanzar un total de 31 mil millones de dólares. En abril, el FMI concedió a Panamá un crédito de 515 millones de dólares para la adopción de medidas urgentes. Poco después se emitieron bonos estatales de un valor de 2,5 mil millones de dólares con un tipo de interés al 4,5 % y plazo hasta 2056 en el mercado internacional.

En conjunto, Panamá parece estar bien posicionado en la comparativa, y la gestión de la crisis por parte del Gobierno ya ha dado algunos frutos: por ejemplo, en el recinto del aeropuerto nacional se construyó en solo cuatro semanas un hospital de campaña con contenedores, aunque el país dispone de alrededor de 350 camas para cuidados intensivos y 500 respiradores. A eso hay que sumar que Panamá amplió notablemente su capacidad para realizar pruebas diagnósticas de covid-19 a pesar de los limitados recursos. Para las empresas se ha puesto en marcha un programa inmediato de financiación para el que se disponen por el momento de 50 millones de dólares. Con el objetivo de ayudar al sector de la población que trabaja en el sector informal o que han perdido el empleo por las medidas de cuarentena, el Gobierno introdujo el programa «Panamá Solidario», a través del cual se reparten bonos de comida y paquetes de alimentos por todo el país. Sin embargo, estas ayudas no han llegado a toda la población, de modo que en abril se desataron crecientes protestas públicas. Además, salió a la luz un escándalo de corrupción en el que está involucrado el vicepresidente, por lo que la credibilidad del Gobierno de Cortizo ha perdido enteros entre la población. Se trata de la compra de material y equipo médico para el hospital de campaña a precios exorbitantes. La actuación transparente y coherente del Gobierno en las primeras semanas de la crisis de la covid-19 dio como resultado un amplio apoyo entre la ciudadanía, que ahora amenaza con retirarlo. El 11 de mayo se publicó el borrador de la estrategia de desescalada del Gobierno, aunque sin mencionar fechas concretas.

Pie de imprenta

Autores

Dr. Jan Woischnik, director del departamento para América Latina, Berlín
Annette Schwarzbauer, asesora para el Cono Sur, Berlín
Olaf Jacob, director de la oficina de Buenos Aires
Anja Czymmeck, director de la oficina en Rio de Janeiro y Kevin Oswald, *trainee*
Andreas Klein, director de la oficina de Santiago de Chile
Sebastian Grundberger, director de la oficina de Montevideo y Thomas Schaumberg, *trainee*
Dr. Christina Stolte, asesora para los países andinos, Berlín
Stefan Reith, director de la oficina de Bogotá
Maximilian Hedrich, director de la oficina de Caracas
Nicole Stopfer, directora de la oficina de Lima
Dr. Georg Dufner, director de la oficina de La Paz
Michaela Braun, asesora para Centroamérica y México, Berlín
Hans Blomeier, director de la oficina de Ciudad de México y Ann-Kathrin Beck, *trainee*
Dr. Rudolf Teuwsen, director de la oficina de Ciudad de Guatemala
Severin Harpf, coordinador de proyecto, Tegucigalpa
Evelyn Gaiser, directora de la oficina de San José
Winfried Weck, director de la oficina Ciudad de Panamá y Hannah Freericks, becaria

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Dr. Jan Woischnik
Director del Departamento América Latina
Cooperación europea e Internacional
Telf. +49 30 / 26 996-3577
jan.woischnik@kas.de

Dirección postal: Konrad-Adenauer-Stiftung, 10907 Berlín

Editorial: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 2020, Berlin
Diseño y maquetación: yellow too Pasiek Horntrich GbR
Composición: Franziska Faehnrich, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

ISBN 978-3-95721-674-8



El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons
Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional, CC BY-SA 4.0
(disponible en: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>)